

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Apelación de Auto

Rad. 016-2016-00931-01

La Sala Quinta de Decisión Laboral resuelve el recurso de apelación interpuesto por LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C frente al auto que rechazó el llamamiento de garantía que propuso en el marco del proceso adelantado en su contra por BLANCA LIBIA ECHAVARRÍA DE RÍOS; trámite en el que también intervino en la pasiva MESACÉ S.A y la PRECOOPERATIVA DEL TRABAJO ASOCIADO COLOMBIA ACTIVA.

ANTECEDENTES:

La promotora llamó a juicio a las administradoras mencionadas con el objetivo de lograr el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes como consecuencia de una vinculación laboral alegada frente a Construtecho, con quien Mesacé S.A contrató el mantenimiento de sus techos, cuyos aportes al Sistema de Seguridad Social eran realizados por medio de la Precooperativa de Trabajo Asociado Colombia Activa, y en donde la muerte de Deiner Ríos Echavarría acaeció en ejercicio de sus funciones.

Notificada la pasiva en la forma debida, la EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C en su calidad de ARL dio respuesta a la demanda y en escrito aparte formuló llamamiento en garantía contra la PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COLOMBIA ACTIVA, el señor CARLOS HUMBERTO LOPERA ZULUAGA y MESACÉ S.A con la intención de que se imponga el reconocimiento a su cargo de los perjuicios que llegare a sufrir en virtud de las condenas impuestas o el reembolso total de los pagos y reservas que tuviere que hacer (Págs. 26-31 Archivo 09 Expediente digital).

Por auto del 20 de noviembre de 2019, el *a quo* admitió el llamamiento realizado a Carlos Humberto López Zuluaga como propietario del establecimiento de comercio “Construtechos”, y lo negó por improcedente frente a la Precooperativa vinculada y Mesacé S.A por encontrarse estas ya ligadas a la litis en calidad de demandadas (Archivo 24 Expediente Digital).

La Equidad Seguros de Vida ante esa determinación interpuso los recursos de reposición y apelación argumentando que sin desconocer la calidad de las llamadas las pretensiones de la demanda inicial difieren de las que persigue frente a la Precooperativa y Mesacé S.A (Archivo 28 Expediente Digital).

El Juzgado por auto del 16 de diciembre de 2019 decidió no reponer la providencia cuestionada y a su vez no concedió el recurso de apelación (Archivo 31 Expediente Digital), el que finalmente habrá de ser surtido, por las resultas del recurso de queja que fue interpuesto al respecto, a partir del cual por auto del 18 de noviembre de 2022 se dispuso la remisión del expediente para ese efecto (Archivo 36 Expediente Digital).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

A voces del numeral 2º del artículo 65 del CPT y de la SS, el auto que negó el llamamiento en garantía es cuestionable a través del recurso vertical y de hecho como se dijo, así se definió por la Sala por decisión dentro del recurso de queja que fue emitida el 29 de octubre de 2020. Por consiguiente, corresponde a la Corporación determinar: 1) si la Equidad Seguros de Vida O.C podía o no llamar en garantía a las codemandadas Precooperativa de Trabajo Asociado Colombia Activa y Mesacé S.A; y 2) si se cumplen los presupuestos procesales para admitir o no dicha vinculación.

Frente a la primera parte del problema jurídico planteado, advierte la Sala que si bien las llamadas integran la pasiva, contrario a lo estimado por el juez de conocimiento, estas sí pueden ser convocadas al litigio como llamadas en garantía, con base en el párrafo del artículo 66 del CGP que es de la mayor relevancia.

En efecto, dicha norma permite que se integre en esa condición a una parte ya vinculada como accionada, conclusión que se desprende de la simple lectura de la disposición normativa que reza: *“...No será necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento cuando el llamado actúe en el proceso como parte o como representante de alguna de las partes”*, lo que significa que desde la intención del legislador se da apertura a la posibilidad de que sea alguna de las partes involucradas en contra de quien se admita esta figura de intervención de terceros, que difiere de la condición de parte, en tanto los fines y propósitos son disímiles respecto del actor y del llamante, pues como bien se aduce por el recurrente, por un lado, se busca la declaratoria de un derecho pensional, y por el otro, el resarcimiento de los perjuicios que causa el eventual reconocimiento a su cargo como ARL, intelección que se acompasa con lo dicho por el tratadista Hernán Fabio López Blanco en su obra Código General del Proceso, pagina 378, cuando expresó:

“...el parágrafo del art. 66 destierra la posibilidad de interpretar que el llamamiento en garantía se debe efectuar únicamente a sujeto ajeno al proceso pues también se puede llamar en garantía a quien actúa como parte dentro del proceso, lo que corrobora el parágrafo al indicar que: “no será necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento cuando el llamado actué en el proceso como parte o como representante de alguna de las partes” Se consagra normativamente la demanda a la coparte como figura procesal propia de la intervención de otras partes y como una modalidad de llamamiento en garantía cuya expresa tipificación se justifica no porque sea novedosa figura, sino debido a la evidente utilidad de ella... En efecto, el llamamiento en garantía en la modalidad de demanda a la coparte es de una manifiesta utilidad en el sistema procesal, por cuanto al desarrollar el principio de economía procesal evita innecesarias actuaciones y permite con el mínimo esfuerzo resolver lo que usualmente ha debido ser objeto de diversos procesos, es decir, responde a la filosofía que explica el llamamiento en garantía...”

Clarificado lo anterior y para resolver la segunda parte de la cuestión, se acude al artículo 64 del CGP. Esta disposición faculta a quien considere tener un derecho legal o contractual frente a un tercero, a reclamar de aquél el pago de los perjuicios que se le generen por virtud de la sentencia, vinculándolo para que en el mismo proceso se resuelva tal relación.

De dicha regulación se desprende que para la procedencia del llamamiento en garantía basta que el llamante afirme la existencia de una relación jurídica por la cual, al llamado pueda exigirse el cumplimiento o cobertura eventual de la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir¹. La posibilidad de llamar en garantía se concreta con la presentación de una demanda que debe cumplir con los requisitos exigidos para la inicial según el artículo 65 del CGP, pues de no ser así, se debe devolver la misma en

¹ Al respecto, el reputado tratadista Hernán Fabio López Blanco en su obra *Código General del Proceso Parte General*, página 376, señaló que de la redacción de la norma se desprende que no es necesario acompañar con la demanda de llamamiento prueba de la relación jurídica, pues basta su afirmación, así: *“...para realizar el llamamiento, no es menester allegar en ese momento prueba de la relación en que se basa, la que obviamente dentro del plenario se deberá aportar o practicar, de ahí que el art 64 tan solo exige que en la demanda se afirme tener derecho legal o contractual ”.*

los términos de los artículos 25 a 28 del CPT y la SS, para que se subsanen sus defectos y si ello no ocurre, rechazarla.

Bajo los parámetros reseñados, se descende el *sub lite* y se encuentra que la demanda presentada por la EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C para llamar en garantía a la Precooperativa de Trabajo Asociado Colombia Activa y a Mesacé S.A se acompasa con lo determinado en el artículo 64 del CGP y cumple con los requisitos formales de los artículos 25 a 28 del CPTSS, sin que se haga necesario aportar prueba de la relación jurídica entre las codemandadas ni se limite su posibilidad a la existencia de pólizas o contratos, ya que basta la afirmación de su existencia para que se proceda con la admisión del llamamiento, la que la llamante basó en la obligación de las personas naturales y jurídicas que se beneficiaron del trabajo del fallecido, y la solidaridad pasiva que existe entre los terceros contratantes, partiendo de que en los casos donde media culpa o dolo, corresponde a los responsables asumir el reconocimiento de las prestaciones además de los perjuicios causados.

Así las cosas, en vista que la demanda de llamamiento en garantía cumple los requisitos explicados, deberá revocarse la providencia que la consideró improcedente para en su lugar admitirla respecto de la Precooperativa de Trabajo Asociado Colombia Activa y Mesacé S.A, ordenando su notificación bajo la premisa del párrafo del artículo 66 del CGP, corriéndose traslado por el mismo término otorgado para la demanda inicial según lo previsto en los artículos 66 ibídem y 74 del CPT y la SS.

Sin costas en esta instancia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **REVOCA** el numeral tercero del auto del 20 de noviembre de 2019 (Archivo 24 Expediente Digital), a través del cual se negó por improcedente el llamamiento en garantía que hizo la EQUIDAD SEGUROS

DE VIDA O.C a la Precooperativa de Trabajo Asociado Colombia Activa y Mesacé S.A. En su lugar, se **ADMITE** el llamamiento en garantía propuesto, cuya notificación se realizará conforme al parágrafo del artículo 66 del CGP, corriéndosele traslado de la demanda del llamamiento por el mismo término otorgado para la demanda inicial.

Sin costas en esta instancia.

La presente providencia queda notificada en los ESTADOS ELECTRÓNICOS.

Los Magistrados,


CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
ACLARA VOTO


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Certifico: Que la providencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 13 fijados el 30 de enero de 2023 en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El Secretario.

ACLARACIÓN DE VOTO

CLASE: PROCESO ORDINARIO

RADICACIÓN No. Rad. 016-2016-00931-01

DEMANDANTE: BLANCA LIBIA ECHAVARRÍA DE RÍOS

DEMANDADA: LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C

De la manera respetuosa acostumbrada con las demás integrantes de la Sala, manifiesto que ACLARO mi voto respecto de la ponencia puesta a consideración, puesto que si bien coincido con la ponencia en que se disponga revocar la decisión materia de alzada y admitir la demanda de llamamiento de garantía enarbolada por La Equidad Seguros S.A., afinco esa postura en que efectivamente el llamante cumplió con la carga argumentativa mínima para demostrar la relación de garantía sustancial subyacente entre el ente societario referido y las llamadas en garantía por la vía de solidaridad; pero no así en el argumento expuesto en el fallo, de que solo basta para admitir esta figura procesal el afirmar por parte del llamante simplemente ser titular de un derecho legal y contractual para exigir de otro, primeramente una reparación de perjuicios, atendiendo a las siguientes consideraciones de orden legal, jurisprudencial y probatorio:

1. Con todo respeto con la posición mayoritaria, me aparto de esta por asentar que el único requisito para hallar procedente la demanda de llamamiento en garantía sea solo afirmar tener una relación legal o contractual, puesto que ello alude solo a un requisito para pedir el llamamiento. Es menester entonces, partir de la definición legal de dicha figura jurídica en el artículo 64 del CGP "... quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación".

2. Sobre el particular, el autor Hernando Devis Echandía explica que "... con alguna frecuencia ocurre que una de las partes -demandante o demandada- tiene el derecho contractual o legal de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio o la restitución del pago que llegue a soportar como resultado, **por existir entre él y ese tercero una relación de garantía**, es decir, aquella en virtud de la cual ese tercero (garante) está obligado a garantizar un derecho del demandante y, en consecuencia, a reponer a la parte principal (garantizada) lo que haya dado o perdido en virtud de la acción de otra persona".

3. En consonancia con esta posición doctrinal, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia proclamó "El llamamiento en garantía es uno de los casos de comparecencia forzosa de terceros, que se presenta cuando entre la parte y el tercero, **existe una relación legal o contractual de garantía que lo obliga a indemnizarle al citante** el 'perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia' que se dicte en el proceso que genera el llamamiento" (GJ CLII, primera parte N°. 2393, pág. SC del 14 oct. 1976 – subraya de la Sala), y refrendando esa posición, en fecha más reciente puntualizó que "... Por tal razón, la Corte ha sostenido que "El texto mismo del precepto transcrito indica que el llamamiento en garantía requiere como elemento esencial que por razón de la ley o del contrato, el llamado deba correr con las contingencias de la sentencia, como consecuencia de la cual el demandado se vea compelido a resarcir un perjuicio o a efectuar un pago" (CSJ SC1304-2018).

4. La tesis antes descrita ha sido acogida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la que refiriéndose al tema manifestó "... la homóloga Civil, por ejemplo, al explicar con profusión la figura del llamamiento en garantía, señaló que tal mecanismo es '...una especie de intervención coactiva a instancia de parte que **se funda en el vínculo de garantía que une al tercero garantizador llamado en causa, con el garantizado, llamador en causa**. Así, el aludido llamamiento se caracteriza porque una de las partes tiene el derecho contractual o legal de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio o la restitución del pago que llegue a soportar en el juicio, por existir entre él y ese tercero una relación de garantía, es decir, aquella en virtud de

la cual ese tercero (garante) está obligado a garantizar un derecho del demandante y, en consecuencia, a reponer a la parte principal (garantizada) lo que haya dado o perdido en virtud de la acción de otra persona. Aquí, lo importante es que exista un afianzamiento que asegure y proteja al llamante contra algún riesgo, pues eso es la esencial del término “garantía”, esto es, protección o defensa contra el ataque de otro sujeto, que por Ley o por convención, el llamado debe salir a cubrir en nombre del llamante” (CSJ SL5031-2019 – subrayas de la Sala).

5. Adicionalmente reza el "ARTÍCULO 65. REQUISITOS DEL LLAMAMIENTO. La demanda por medio de la cual se llame en garantía deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos en el artículo 82 y demás normas aplicables. El convocado podrá a su vez llamar en garantía". Y el ARTÍCULO 66. TRÁMITE. Si el juez halla procedente el llamamiento, ordenará notificar personalmente al convocado y correrle traslado del escrito por el término de la demanda inicial. De otro lado, se advierte que con la nueva redacción de la figura, la solicitud debe hacerse por medio de demanda con la totalidad de los requisitos exigidos para su presentación y no mediante escrito como lo preceptúa el Código de Procedimiento Civil (arts. 65 y 82 C.G.P).

Como conclusión, las pretensiones del llamamiento en garantía que un sujeto procesal puede plantear en su calidad de demandante (principal o en reconvención) son totalmente diferentes a las solicitudes o consecuencias del llamamiento en garantía realizado por un sujeto procesal en su calidad de demandado (directo o en reconvención). Por ello, quien realiza el llamamiento en garantía -demandante o demandado- y quien analiza la figura -el juez de conocimiento-, para hallarla procedente deben entender las diferencias de las relaciones jurídicas, su origen y efectos frente a una y otra, con miras a evitar un fallo contrario al principio de congruencia consignado en el artículo 281 del CGP y una eventual nulidad o transgresión a los derechos de las partes, lo cual no se garantizaría de declararse procedente la demanda o reconvención o contrademanda en llamamiento en garantía con solo afirmarse en la demanda o en la reconvención o contrademanda tener derecho legal o contractual para exigir de otro la indemnización de perjuicios.

Bajo las premisas anteriores, coincido en que la demanda presentada por la EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C para llamar en garantía a la Precooperativa de Trabajo Asociado Colombia Activa y a Mesacé S.A se acompasa con lo determinado en el artículo 64 del CGP y cumple con los requisitos formales de los artículos 25 a 28 del CPTSS, pero me aparto respetuosamente de la parte considerativa del fallo en cuanto que se arguye que no es necesario sustentar y explicitar en el libelo incoativo de llamamiento cuál es la relación sustancial de garantía entre el llamante y los llamados a salir a responder por una eventual indemnización de perjuicios que involucre a quien acciona este mecanismo procesal y que sea solo suficiente afirmar la existencia de dicha relación. Otro asunto diferente es que se encuentre dentro del terreno de la lógica y lo razonable que la aducción de la prueba tendrá que emerger o practicarse en el debate probatorio correspondiente. Con mi acostumbrada consideración y respeto,

Cordialmente,



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

MAGISTRADO